

nidad Soto, por portacion de moneda falsa. Practicadas las primeras diligencias, y no resultando méritos para la continuacion del proceso, el mencionado Juzgado de Distrito, por auto de 29 de Abril, mandó sobreseer en la presente causa, cuya determinacion fué confirmada en 8 del pasado Julio por el Tribunal de Circuito de Querétaro. El que suscribe, encontrando arreglada á derecho esta determinacion que causa ejecutoria conforme al artículo 34 de la ley de 14 de Febrero de 1826, y no encontrando mérito para exigir la responsabilidad á los jueces que intervinieron en este proceso, pide se dé por revisado.

México, 2 de Setiembre de 1874.—*Velazquez.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, 3 de Setiembre de 1874.—Por revisada y no apareciendo méritos para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Son copias. México, Setiembre 14 de 1874.—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Morelos por el C. Lic. Antonio Robert, como apoderado sustituto de la Sra. D^a Manuela Cortazar y de los Sres. Goribar y Escandon hermanos en liquidacion, contra los efectos de la ley de 7 de Mayo último, expedida por la Legislatura de ese Estado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que D. Antonio Ayestaran como apoderado de D^a Mannela Cortazar de Cervantes y de los Sres. Escandon Hermanos en liquidacion, D. Jesus y D. Faustino Garibar, presentó escrito á este Juzgado pidiendo amparo en las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitucion, contra la ejecucion de las leyes de 12 de Octubre de 1873 y 21 de Abril del presente año, expedidas para el Estado. Por auto de 4 de Mayo del que cursa, el C. Juez interino Lic. Mariano San-salvador decretó la suspension inmediata de las leyes reclamadas, conforme al artículo 5º de la ley de 20 de Enero de 1869, fundándose en la urgencia alegada por los quejosos y en el hecho acreditado para el Juzgado, de que los informes pedidos á las autoridades foráneas no vienen sino pasados los términos legales y cuando el acto mandado suspender se ha llevado á efecto.

Hoy, segun la razon puesta por V. en el escrito que se me ha pasado en traslado, el C. Lic. Antonio Robert ha presentado nuevo escrito en que pretende, como representante de las personas antes expresadas, que se amplie el amparo promovido por D. Antonio Ayestaran, como apoderado sustituto de las mismas personas, contra la ley de Hacienda expedida para el Estado en 7 de Mayo del presente año, que adolece de los mismos vicios y viola las mismas garantías

que las promulgadas en 12 de Octubre de 1873 y 21 de Abril de 1874.

El artículo 102 de la Constitucion, previene que la sentencia de los juicios de amparo será siempre tal, que ocupándose de los individuos particulares se limite á protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso; y por consiguiente, el que suscribe cree que una peticion ó concesion de amparo, no puede ampliarse de un caso á otro, supuesto que ademas esta prohibido hacer ninguna declaracion general sobre la ley ó acto que la motivare. Pero el artículo 4 de la ley de 20 de Enero de 1869, solo exige que el individuo que solicite amparo, cuando su queja se funde en la fraccion 1ª del artículo 101 de la Constitucion, exprese la garantía individual que considere violada y designe la ley ó acto que motive el amparo. Pero el artículo 4º de la ley de 20 de Enero de 1869, solo exige que el individuo que solicite amparo, cuando su queja se funde en la fraccion 1ª del artículo 101 de la Constitucion, exprese la garantía individual que ha sido violada y designe la ley ó acto que motive el amparo. Esos requisitos se encuentran en el escrito sobre que pido, y en consecuencia, dispuestos ademas como deben estar los tribunales para administrar justicia sin formalidades que no sean enteramente indispensables, cree el que suscribe que debe admitirse el escrito á que se refiere este pedimento.

En ese sentido y limitándose al punto de suspension, el Promotor encuentra difícil mas que nunca la cuestion, por las notorias circunstancias anormales en que se halla el Gobierno del Estado; pero considerando esa cuestion de una manera abstracta, ajená de toda pasion, y precindiendo de los intereses cualesquiera que sean que se complican, el que suscribe tiene por regla en esa materia, que debe decretarse la suspension siempre que el acto reclamado causa gravámen irreparable á los quejosos, y cuando consumado el mismo acto queda inútil

el juicio de amparo y la decision de los Tribunales federales.

En nuestro caso, de suspender el acto resultará para el Estado, que no pueda contar por algun tiempo con los recursos equivalentes á las contribuciones de cuyo cobro se trata; y de no suspenderlo habrá para los quejosos la pérdida de los intereses que se les han embargado y cuyo resarcimiento no puede comprender la concesion del amparo. Efectivamente, las contribuciones cobradas por autoridad ilegítima, ni son de devolverse ni puede decretarse que las devuelva la que les sustituye, y en cambio, para los causantes el pago importa la pérdida de los intereses secuestrados, que en nuestro caso, son los sembrados, los encercos de las negociaciones, los útiles de labranza y los productos en beneficio, segun los avisos de remate publicados por el periódico oficial del Estado.

Por la razon pues, de que el gravamen causado á los quejosos con la consumacion del remate de los bienes embargados, sería irreparable en la sentencia definitiva de este recurso, y por que ademas la misma sentencia no podría surtir efecto respecto de la cobranza de las contribuciones correspondientes al embargo ya practicado por las oficinas recaudadoras; siendo notoria la urgencia del caso, es mi opinion que sin nuevo trámite se decrete la suspension pedida en el escrito que antecede.

Por otra parte, yo no habría entrado en estas consideraciones, si como lo ha declarado la Suprema Corte en diversas ejecutorias y yo sostendré á su debido tiempo, la incompetencia por ilegitimidad no fuese motivo de amparo, por violacion de garantías individuales, presindiendo de la retroactividad de que tambien me ocupare en tiempo oportuno.

Por lo que y teniendo tambien como precedentes los repetidos casos en que se ha decretado la suspension en circunstancias iguales y muy particularmente por su pa-

sustanciado un nuevo ó independiente recurso.

Bajo ese concepto, paso á ocuparme de la única causa de violación de garantías invocada en la nueva queja, que consiste en la ilegitimidad del C. Lic. Agustín Clavería, como sustituto Gobernador, que promulgó la ley reclamada.

La prolongada discusión de la ejecutoria de 11 de Abril en que tan prolijas y extensas razones se han aducido sobre la cuestión de si la incompetencia de origen llamada absoluta, es decir, la ilegitimidad de las autoridades, es causa de violación de la garantía que otorga el art. 16 de la Constitución, me releva de entrar en la de si los tribunales federales pueden calificar la ilegitimidad de las autoridades en los recursos de amparo.

Yo, que desde mis pedimentos en los que se pronunció aquella ejecutoria, sostuve la afirmativa, he venido á tener una convicción bien arraigada por esa discusión y por las resoluciones de la Suprema Corte, hasta el grado de que no solo creo que la incompetencia por ilegitimidad está comprendida como cualquiera otra en la prohibición del artículo constitucional citado, sino que era indispensable que lo estuviese, para que el recurso de amparo tuviera una extensión eficaz y bastante para salvar los derechos individuales, y hacer prácticas las garantías individuales; y lejos de que se ataque la soberanía de los Estados subvertiendo el sistema con el juicio de ilegitimidad de sus autoridades, esa resolución queda garantizada en los términos del pacto federal al abrigo de usurpaciones, el sistema se afirma llenando su objeto que es la inviolabilidad de los derechos del hombre, y se asegura también la soberanía del pueblo.

Repetir ahora las razones que se han hecho valer en esa discusión, sería inútil y para mí también espuesto, que procurase ampliarlas.

Sin embargo, creo necesario hacer las observaciones siguientes:

1º: Que cuando antes no se había hecho tanto alarde de la soberanía de los Estados, sin embargo de que algunas veces el Gobierno general ha influido aun en sus elecciones locales y casi decidido de sus destinos, malos deben ser los títulos de ilegitimidad de las autoridades sobre cuya competencia se trataba de decidir, puesto que no han vacilado en hacer al Poder judicial de la Federación, el infundado cargo de abrigar tendencias centralizadoras.

2º: Que á diferencia del poder ejecutivo en que la ampliación de facultades tiende siempre al despotismo, la mayor extensión de las del poder judicial consiste á garantizar mejor los derechos, la vida y los intereses mas caros de los individuos.

3º: Que por sus respetables ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia tiene resuelta esa cuestión, especialmente por la de 11 de Abril tantas veces citada.

En el concepto pues, de que los tribunales federales pueden y deben, en casos como el presente, inquirir y resolver sobre la ilegitimidad de las autoridades, examinemos la del C. Agustín Clavería, Gobernador sustituto del Estado.

La constitución particular del mismo, estableció primitivamente en su art. 69, que las faltas temporales del Gobernador cuando no excedieren de seis meses, serian cubiertas por el Presidente del Tribunal Superior, y si excedieren, por el individuo que nombrara la Legislatura, que si estuviere en receso cuando ocurriere la falta, seria convocada para los efectos de este artículo.

En la nueva Constitución promulgada en 5 de Diciembre de 1871, ese mismo artículo aparece reformado en los términos siguientes: Las faltas temporales del Gobernador, serán cubiertas por el Presidente del Tribunal Superior ó por el Magistrado que haga sus veces.

Los quejosos citan y se atienen al 1º, y las autoridades informantes sostienen el 2º reformado.

Veamos pues, si la reforma de ese artí-

ridad, al amparo solicitado por D. Ramon Portillo y Gomez y socios, contra la ley de hacienda del Estado de 12 de Octubre de 1873, en que la Suprema Corte no ha encontrado méritos para creer responsable al Juez que decretó la suspension.

El Promotor fiscal pide se decrete la inmediata suspension de los actos de ejecucion de la ley que ahora se reclama, conforme á la peticion de los quejosos, y con arreglo á la parte final del artículo 5º de la citada ley de 20 de Enero de 69.

Otro sí digo: que debe mandarse repóner con el correspondiente, el papel del sello 5º empleado en este pedimento.

Cuernavaca, Junio 3 de 1874.—*Nicolas Medina.*

Segundo pedimento fiscal.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal en el recurso de amparo promovido por el C. Lic. Antonio Robert, como apoderado sustituto de la Señora Dª Manuela Cortazar de Cervantes y de los Sres. D. Faustino Goribar y Escandon Hermanos, en liquidacion, contra la ley de 6 de Mayo por violacion de garantías, su estado supuesto que es el de alegar, dice: que la justificacion de V. se ha de servir resolver, que los quejosos han probado bien y cumplidamente que el C. Lic. Agustin Claveria, que sancionó la ley reclamada, no era Gobernador legítimo del Estado; que por consiguiente, con su ejecucion, se violó en las personas de los quejosos la garantía consignada en el art. 16 de la Constitución de la República, y la Justicia de la Union ampara y protege á los mismos quejosos contra esa violacion, pues así procede en términos de rigurosa justicia, según consta de los fundamentos legales que paso á espóner.

En mi pedimento sobre el punto de suspension, manifesté, que en mi opinion no podía ampliarse de un caso á otro una peti-

cion ó concesion de amparo; pero que reuniendo el escrito de queja los requisitos prevenidos por el art. 4º de la ley de 20 de Enero, debia admitirse como peticion de nuevo amparo, sustanciándose otro recurso independiente del que se intentó ampliar.

Efectivamente, además de que conforme al art. 102 de la Constitucion federal está prohibido hacer en estos recursos declaraciones generales sobre la ley ó actos que los motive, y de que los tribunales federales deben limitarse á proteger y amparar á individuos particulares en el caso especial sobre que versa el proceso, y admitir la ampliacion de una queja á otro acto ó ley diversa de los que antes se habian reclamado, resultará necesariamente una complicacion en los procedimientos, y aunque sean unas mismas las autoridades ejecutoras y la que promulgó las dos leyes reclamadas, no existe lo que jurídicamente hablando se llama continencia de la causa, porque los amparos tienen que limitarse á caso especial, y diversos casos requieren la sustanciacion de diversos recursos.

Por el art. 4º de la ley de 20 de Enero antes citada, solo se exige, que cuando la queja se funda en la fraccion 1ª del art. 1º, se designe la ley ó acto que motive el amparo, y se exprese la garantía constitucional violada; y el art. 2º de la misma ley, que es el 102 de la Constitucion de la República, únicamente considera indispensable para la prosecucion de estos recursos, la peticion de la parte agraviada; y por último, como tambien expresó en aquel pedimento, los tribunales, en la administracion de justicia, no deben exigir otros requisitos de forma, que los absolutamente indispensables.

Resuelto el punto de suspension, se pidió el informe de ley á las autoridades ejecutoras, y estas hicieron observaciones al procedimiento que implica el admitir que se ampliara la peticion del amparo anterior; pero el Juzgado habia ya admitido el escrito como iniciacion de nuevo amparo, y ha

culo fué buena porque llenase los requisitos prevenidos por la misma Constitucion.

En su art. 149 establece:

Esta Constitucion puede ser adicionada ó reformada; pero para ello se observarán los requisitos que establecen las fracciones siguientes:

1ª: Su reforma ó adicion propuesta, solo será admitida á discusion, si estuvieren por la afirmativa dos tercios de los diputados presentes.

2ª: La Legislatura en cuyo periodo se proponga la adicion, se limitará á declarar que merece sugetarse á discusion y la mandará publicar en el periódico oficial, reservando su deliberacion á la Legislatura próxima siguiente.

3ª: Para que ésta las apruebe y formen parte de la Constitucion, se requiere el voto de dos tercios de los diputados presentes.

En 1º de Junio de 1871, el C. Diputado Ramon A. Montañez, presentó á la Legislatura una proposicion que testualmente dice:

Unica. "Son reformables, el art. 31, la fraccion 4ª del art. 45, el art. 48, el cap. 1º tít. 4º, la fraccion 1ª del art. 77, el 87 y el 128 de la Constitucion del Estado".

El art. 69 que nos ocupa, está comprendido en el cap. 1º tít. 4º de la Constitucion, y á esa proposicion recayó el siguiente acuerdo de la Legislatura:

"Cuernavaca, Junio 1º de 1871. Aprobada y se mandó pasar para su resolucion al Congreso venidero, mandándose copia al Ejecutivo para su publicacion, conforme á la fraccion 2ª del art. 149".

¿Pero se cumplió con el requisito que establece la fraccion 1ª de este artículo? Puede decirse que el C. Montañez propuso realmente las reformas constitucionales? Expresó acaso como proponia, que quedaran reformados los artículos á que se refiere su iniciativa?

Indudablemente no; se limitó á decir y proponer respecto de esos artículos, lo que ya estaba declarado por la Constitucion, es

decir, que podria ser adicionada ó reformada; pero las reformas no se especificaron, y por consiguiente esas reformas no fueron propuestas. Y tan es verdad, que la segunda Legislatura, es decir, la instalada el 16 de Setiembre de 1871, no se guió por esa proposicion que en la sesion del 20 de Setiembre de 1871 se mandó pasar á las comisiones unidas de puntos constitucionales y legislacion, no solo la proposicion *única* del C. Montañez, sino estas otras dos que se lo agregaron:

"2ª: La fraccion 9ª del art. 45 de la Constitucion, quedará en estos términos: Conceder ó denegar indultos ó amnistias por delitos cuyo conocimiento pertenezca á los tribunales del Estado; pero solo concederá la gracia de indulto á los reos á quienes se hayan condenado á sufrir la pena capital, por sentencia que cause ejecutoria, en los casos y de la manera que determine la ley orgánica respectiva.

3ª: el art. 30 quedará en estos términos: Por cada 18,000 habitantes ó por una fraccion que exceda de 9,500, se elegirá un diputado propietario, y por cada diputado propietario se nombrará un suplente".

Procediendo pues esa misma Legislatura á discutir y votar las reformas constitucionales, infringió la fraccion 2ª del art. 149, porque hasta en uno de sus periodos vinieron á proponerse en el dictámen de las comisiones, y antes, ni el C. Montañez habia propuesto la de los artículos á que se refiere su exposicion de 1º de Junio, y no dice propuso las del art. 30, ni de la fraccion 9ª del art. 45.

En la sesion de 1º de Diciembre se dió cuenta con el dictámen de las comisiones, y se discutió el mismo dictámen, y en la de 2 de Diciembre se votaron las reformas, quedando aprobada la del artículo 69 por unanimidad.

Por consiguiente, esa reforma no debe considerarse válida ni subsistente, supuesto que al hacerla no se llenaron los requisitos establecidos por la misma Constitucion.

Es verdad que la consideracion de la ejecutoria de 11 de Abril, segun la que no era buena la reforma constitucional relativa á la reeleccion del Gobernador, no puede estenderse á tener por decidido, que tampoco fué buena la que ahora examinamos.

El artículo 102 del Pacto federal, establece que en los recursos de amparo, se limitarán los tribunales federales á proteger y amparar á individuos particulares, sin hacer declaraciones generales; pero en aquel caso, hubolas mismas razones de consideracion, y en este la prueba es la misma que entonces se rindió, y consiste en documentos auténticos; por lo que debe decidirse igualmente: "Que está probado bien y cumplidamente, que la reforma del artículo constitucional relativo, no se hizo de la manera que la misma Constitucion previene." Por otra parte, el artículo 102 de la Constitucion del Estado, dice: "El Tribunal de justicia se compondrá de tres ministros y un fiscal propietarios, y otros tantos suplentes que cubrirán las faltas de aquellos." Establece que los suplentes (artículo 104) serán nombrados al principio de cada año, por el propio Tribunal; y entre las facultades del Congreso fija, (fracción 17 artículo 45) la de nombrar ministros interinos del Tribunal Superior de Justicia en las faltas absolutas de los electos popularmente, mientras se procede á nueva eleccion.

De manera, que en el Estado, puede haber tres clases de ministros del Tribunal: los propietarios electos popularmente; los interinos nombrados por la Legislatura y los suplentes que al principio de cada año nombra el propio Tribunal; pero como se dice en el escrito de queja, los suplentes tienen una mision muy temporal, que está reducida á ejercer jurisdiccion en los casos de impedimento pasajero de los Ministros propietarios ó interinos. Efectivamente, la Constitucion del Estado, para el caso en que las faltas de los Ministros propietarios puedan prolongarse, estableció, que la Legislatura

nombrara Ministros interinos. ¿Puede suponerse que un Ministro suplente llegue á sustituir al Gobernador? En primer lugar, el mismo artículo 102 de la Constitucion del Estado, limitó la mision de los suplentes á cubrir las faltas de los Ministros propietarios, solo para ejercer jurisdiccion en algunos casos y muy temporalmente. Solo los Magistrados interinos pueden sustituir á los propietarios en todas sus atribuciones, y mientras tanto se procede á nueva eleccion. Pero para sustituir al Gobernador, es decir para que en todo caso el poder público esté en manos de los funcionarios electos ó nombrados por el pueblo, los ministros suplentes, pueden ser considerados como constitucionales. Es verdad que tanto los unos como los otros fueron instituidos por la Constitucion, pero su mision constitucional es bien diversa: la de los Ministros suplentes se reduce á sustituir temporalmente á los propietarios ó interinos, y la de estos á cubrir las faltas del Gobernador, que no excedan de seis meses; pero no hay prevencion alguna constitucional que invista á los suplentes de los Magistrados, con el carácter tambien de suplentes del Gobernador.

Las comisiones unidas de puntos constitucionales y legislacion, al proponer la reforma del artículo 69 decian en la parte positiva de su dictámen: "El actual ejecutivo del Estado al observar el proyecto de Constitucion, decia acerca de este artículo las siguientes palabras, que las comisiones dictaminadoras las adoptan y las hacen suyas.

"El Ejecutivo entiendo, que para la conservacion de la paz pública es sumamente importante que los depositarios de los diversos poderes del Estado esten prófijos de antemano por la ley, previendo todas las eventualidades y á fin de cerrar las puertas á todas las aspiraciones bastardas, durante los periodos designados por la Constitucion para la duracion de los poderes; y para ello es conveniente, que esté determinado por la ley, no solo la manera de suplir al Gober-

nador en sus faltas temporales, sino tambien la persona moral, esto es, la autoridad que deba remplazarlo, pues presta mas garantías á la sociedad, que el que supla tales faltas sea un funcionario constitucional, que cualquiera otra persona uo nombrada nuevamente por el Congreso y para un tiempo tal vez muy corto, ya porque esta circunstancia le priva del estímulo y ya tambien porque se pueden crear aspiraciones contrarias á la paz pública, que á toda costa deben procurar los Gobernadores conservar."

"En efecto, Señor, desde el momento en que se consigne, que aun durante los periodos constitucionales puede haber cambio de los altos depositarios del poder, aunque sea bajo el carácter de faltas temporales, pudiendo entrar cualquiera persona con tal que consiga la mayoría de votos en el Congreso, la oposicion que justa ó injustamente existe en todas las sociedades, concibo la esperanza próxima que legalmente debia reservar para los periodos electorales; y anticipándose á ellos, convierte en armas de partido la oportunidad que se le presenta; la cuestion será de hacerse de unos cuantos diputados, y hecho esto entablar una acusacion aunque sea indebida, para hacerse del poder colocando por asalto un candidato, lo cual sería falsear las instituciones que *exigen la eleccion del pueblo para el nombramiento de sus gobernantes*, y no al capricho de una mayoría parlamentaria, que no por serlo, ha de ser infalible ni exenta de pasiones."

"Es un error creer que la soberania está solo en el Congreso: ella reside esclusivamente en el pueblo, quien la ha resignado en parte en los tres poderes; pero reservándose la principal, que es la facultad electoral; y si esta le quitamos ¿qué le queda entonces al pueblo soberano? Nada mas que un título ridiculo y vano, que de nada le serviría, puesto que nunca llegaria á ejercerlo; pues bien, de la manera que está concebida la segunda parte del artículo de que nos estamos ocupando, sucederia ese mal: el pueblo

se convertiria en rey de burlas, los periodos constitucionales serian inútiles, y el poder ejecutivo estará á disposicion del primer intrigante que tenga la astucia suficiente para pretender escalarlos.

No sucederá ciertamente esto, si un funcionario público como el Presidente del Tribunal Superior, es el designado para cubrir todas las faltas temporales del Gobernador, ni se prestará tan facilmente á servir de instrumento de partido, y vendría á ese punto cuando naturalmente lo llamara la ley.

Y bien; ¿no habran en nuestro caso las mismas consideraciones; no son aplicables las mismas frases al peligro de que el Gobernador sea suplido por un individuo nombrado por el Tribunal para otro objeto, y por un tiempo todavia mas corto? ¿Ahora como antes, no exigen las instituciones la eleccion del pueblo para el nombramiento de sus gobernantes?

Y no es verdad que los funcionarios constitucionales sean lo mismo que los suplentes: en la Constitucion, en el dictámen que acabamos de ver, en las leyes, y aun en el sentido comun, los funcionarios constitucionales se mencionan en contraposicion de los suplentes: y respecto de los Ministros, los interinos funcionan mientras se procede á nueva eleccion, y los suplentes solo de una manera transitoria.

El artículo 89 del Pacto federal establece, que todo poder público dimana del pueblo, y no interviene por cierto la voluntad, ni el nombramiento popular, ni aun indirectamente, en el caso de que un Ministro suplente del Tribunal se encargue del ejercicio del poder ejecutivo. Los suplentes como hemos visto, son nombrados por el mismo Tribunal, pero solo para ejercer jurisdiccion en los pocos casos de impedimento pasajero de alguno de los Ministros propietarios.

No es verdad que la Constitucion del Estado haya previsto, como no previó, el caso de que faltaran todos los Ministros propietarios y el Tribunal se formara de suplentes.

tes, pudiendo alguno de estos ser llamado á cubrir las faltas del Gobernador; ella quiso que siempre que faltara de una manera absoluta alguno de los Ministros, se procediera cuanto antes á nueva eleccion, y cuando faltara por un tiempo indefinido ó algo prolongado, se nombrará ministro interino, dejando á los suplentes, como he repetido, una mision enteramente transitoria y violenta.

Pero todavia se convence uno mejor de que no fué previsto ese caso, fijándose en que segun el artículo 102, solo puede haber y solo pueden nombrarse tres ministros suplentes: si pues alguno puede ser llamado á suplir al Gobernador, el Tribunal queda acéfalo ó no se encontrará prevencion constitucional que justifique el nombramiento de un cuarto Ministro suplente, supuesto que conforme al mismo artículo, el fiscal no tiene el carácter de Ministro. Si el suplente que funja de Gobernador interino despacha á la vez como Presidente del Tribunal, se violaría el título 2º de la misma Constitucion, que despues de establecer la division de poderes dice: "No podran reunirse estos poderes, ni dos de ellos en una sola persona ó corporacion." Por consiguiente, para que un Ministro suplente llegue á presidir el Tribunal, es indispensable que este se componga solo de suplentes; no puede admitirse que en ese caso el Presidente cubra las faltas del Gobernador, sin que resulte acéfala la administracion en cualquiera de sus ramos.

La Constitucion pues, al prevenir que el Presidente del Tribunal cubriera las faltas temporales del Gobernador, no se refirió á cualquiera Presidente como se dice en uno de los informes; y si no deben hacerse distinciones donde la ley no las establece, tambien es cierto que los diversos artículos de la misma ley se explican los unos por los otros, y no deben admitirse contradicciones ni absurdos en ella, cuando por la misma ley pueden facilmente coordinarse sus diversas disposiciones.

El artículo 109 de la Constitucion fede-

ral, garantiza para el régimen interior de los Estados la forma de gobierno republicano, representativo, popular, y una de las bases de ese sistema establecido por el artículo 39 del mismo Código, consiste en que todo poder público debe ser emanacion del pueblo; todavia el artículo 41 especifica que el pueblo ejerce su soberania en lo que toca al régimen interior de los Estados, conforme á las Constituciones particulares de los mismos. Es pues circunstancia esencia en la forma de gobierno que los Estados deben adoptar y seguir, el que los poderes públicos dimanen del pueblo y se ejerzan conforme á las Constituciones particulares. Y ya hemos visto que el pueblo no ha intervenido directa ni indirectamente en la comision que para ejercer el poder Ejecutivo del Estado desempeñaba el C. Lic. Agustín Claveria cuando se publicó la ley reclamada; y por último, la autoridad que ejercia este Sr. que debiera ser la expresion genuina de la soberania popular, era anticonstitucional y por consiguiente extralimitaba los poderes conferidos por el pueblo.

Por todo lo que el Promotor pide, se declare en los términos del principio, que repite para concluir.

Morelos, Julio 10 de 1874.—*Nicolas Medina.*

Es copia que certifico.—*Luis G. Labastida*, secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Cuautla de Morelos, Julio 16 de 1874.
—Visto el recurso de amparo promovido por el C. Lic. Antonio Robert, como apoderado sustituto del C. Agente de negocios Julian Montiel y Duarte, quien á su vez es representante legítimo de la Sra. D^a Manuela Cortazar de Cervantes y de los Sres. Don Jesus y Don Faustino Goribar y Escandon hermanos, en liquidacion, contra la ley de Hacienda del Estado de Morelos de 7 de Mayo del corriente año, con cuya ejecucion

creen los peticionarios violada la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitución federal; vistos los informes de las autoridades inmediatamente ejecutoras de la misma ley, las pruebas rendidas; lo alegado por el C. Promotor fiscal y los quejosos; y

Considerando 1º: Que el presente juicio debe limitarse únicamente al amparo pedido contra el decreto de 7 de Mayo del presente año, pues en este sentido se ha sustanciado por no haber sido posible conforme á derecho, el considerarlo como ampliación de otro diverso recurso, según plenamente lo convence las razones aducidas por las autoridades informantes y el C. Promotor fiscal.

2º: Que los peticionarios para fundar la procedencia del recurso de amparo, exponen las siguientes proposiciones que han pretendido demostrar con extensos razonamientos y comprobar en cuanto á los hechos con varias pruebas rendidas oportunamente: 1º: La prescripción constitucional del artículo 16 en su primera parte, consigna como uno de los derechos del hombre, el de no poder ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 2º: La persona que como encargada del Poder Ejecutivo del Estado promulgó el decreto de 7 de Mayo, no era Gobernador legítimo del mismo, por cuya razón no es autoridad competente. 3º: De las proposiciones anteriores rectamente se infiere, que no puede hacerse efectivo el decreto anterior, sin que se viole en sus personas el referido artículo 16 en la parte que se refiere á la autoridad competente, siendo por tanto indudable la procedencia del juicio de amparo.

3º: Que de la 2ª proposición arriba transcrita, no se infiere sin embargo la 3ª, y por lo mismo no es necesario ni siquiera tomar en consideración las razones que para fundar aquella se exponen, ni las pruebas que en su comprobación se han rendido, pues

el suscrito Juez la supone absolutamente cierta.

4º: Que en comprobación de lo anteriormente expuesto, hay que tener presente, que según el tenor literal del artículo 16 de la Constitución, se comprende desde luego que se refiere, no á los requisitos que deben tener las leyes, sino aquellos con que deben aplicarse en caso de ejecución forzosa, los cuales fueron previstos y consignados en el citado artículo como garantías del hombre para asegurarle sus derechos contra el abuso de las autoridades inmediatamente ejecutoras de las leyes. Estos requisitos que constituyen cada uno por sí solo una garantía, son los siguientes: 1º: Mandamiento escrito. 2º de la autoridad competente; 3º y 4º: expresión del fundamento y motivo de la causa legal del procedimiento.

5º: Que por lo mismo, las palabras *autoridad competente*, no se refieren ni de una manera remota á la competencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para expedir y promulgar las leyes y decretos, sino á la de las autoridades mismas que directa e inmediatamente las ejecuten.

6º: Que examinando no literal sino científicamente el artículo 16 que nos ocupa, bajo el punto de vista de su interpretación, y siguiendo para esto las reglas fundamentales y generales consignadas por uno de los mejores intérpretes de la mas difícil de las legislaciones (M. F. C. de Savigny—*Traité de Droit Romain*, Livre 1º Chapitre 4me), obtendremos el mismo resultado. Para este efecto es preciso desde luego convenir, en que el artículo 16 no contiene ni una palabra impropia que denuncie una contradicción en sus términos con su sentido, ni una frase indeterminada que encierre un pensamiento incompleto; de lo cual se infiere, que en su expresión no es defectuoso, y en tal virtud debe examinarse, en primer lugar, en cuanto á su lenguaje; en segundo, respecto á la hilación lógica de sus conceptos; en tercer lugar con relación á su historia, y por último en su conexión con el Código de que forma parte.

7º: Que respecto al primer punto, es tan clara la significacion del artículo 16 en el sentido de que se refiere á las autoridades inmediatamente ejecutoras, y no á las que simplemente han expedido ó promulgado las leyes, que de lo contrario tendríamos que admitir, que con menosprecio de la propiedad en el tecnicismo jurídico y en el idioma de la legislación, los legisladores constituyentes comprendieron á la ley en las palabras *mandamiento escrito*, al legislador en las de *autoridad competente* y al hecho de la promulgacion en la voz *procedimiento*.

En cuanto al segundo punto, esto es, en cuanto á la hilacion lógica de los conceptos que encierra, es tan absurdo el suponer que hable de las autoridades que expidan y promulguen las leyes, que en esta hipótesis tendríamos que convenir, en que conforme á nuestro derecho público ninguna ley tendria fuerza á no ser que los poderes legislativo y ejecutivo expresaran en ella, y en la forma de mandamiento escrito, los motivos y fundamentos de las causas legales que hubiera tenido el uno para expedirla y para promulgarla el otro. De esta manera, no habria una sola ley en la República que no atacara una garantía individual; y como esto sea absolutamente falso, claro es que el artículo 16 no se refiere al poder Legislativo y Ejecutivo, sino á las autoridades meramente ejecutoras de las leyes. Es esto tan cierto, que el segundo pensamiento que contiene el artículo 16 envuelve una escepcion al principio antes consignado, pues de otra manera no puede comprenderse cual sea la hilacion de ambos conceptos para hallarse en el mismo artículo. Ahora bien, si una escepcion para que lo sea realmente, debe ser de igual género que el que la regla contiene, como es la escepcion, se refiere, á un acto que puede ser ejecutado por una sola persona y sin requisito alguno, claro es que la regla no puede comprender sino actos de las autoridades ejecutoras de las leyes. Respecto al tercer punto, ninguna persona de las versadas en nuestro derecho constitucio-

nal ignora que la garantía del artículo 16, así como la mayor parte de los derechos individuales, se hallaban anteriormente consignados en la legislación común, y que solo se incluyeron en la Constitucion de 1857 para darles ese carácter de inviolabilidad que exigen en el sistema democrático los sagrados derechos del hombre. Esto supuesto, en vano se buscará en los precedentes de nuestro derecho público y privado anterior al Código de 57, un solo caso que autorice á juzgar con motivo de la competencia de una autoridad subalterna en el orden administrativo, la legitimidad de los altos funcionarios de un Estado. Por último, la comparacion del artículo 16 con los demas de nuestra Constitucion, no nos permite decidir, que en el supuesto de que el poder judicial de la federacion pudiera conocer en todo caso de la legitimidad de los altos funcionarios de un Estado, y que tan importante facultad estuviera virtualmente contenida en las palabras *autoridad competente* de que usa el artículo en cuestion, tendríamos que convenir, en que por medio de un recurso de amparo que en realidad solamente tiene una instancia, porque la revision no la causa en que no se reconoceria como parte á las autoridades cuyos títulos fueran el objeto del debate judicial, y cuya resolucion traeria consigo grave responsabilidad para las autoridades que se dicen usurpadoras. Por el contrario, la letra y el espíritu de nuestra Constitucion, no permiten que la materia de un juicio de tan elevada importancia á nuestro régimen federativo, y que versa acerca de la comision de un delito público, se trate de una manera incidental, y así se examine la fuerza de una ley de la mayor importancia en un Estado, y la responsabilidad de un funcionario sin que ni aun siquiera disfrute de una sola de las garantías que á todo hombre otorga nuestra carta fundamental.

8º: Que lo anteriormente expuesto no quiere decir que la garantía consignada en la primera parte del artículo 16 no puede

violarse por una ley, pues que como todas las de su especie, bien puede serlo por leyes ó actos de las autoridades. Esto tendría lugar, siempre que alguna ley ordenara un procedimiento si no todos, algunos ó alguno de los requisitos constitucionales, ó que la autoridad procediera sin observarlos.

9º: Que en el presente caso, el decreto de 7 de Mayo no previene á sus ejecutores que procedan sin cumplir los requisitos que previene la Constitucion, ni tampoco los quejosos han impugnado la competencia de los CC. Administradores de rentas del Estado, para hacer el cobro del impuesto que en aquel decreto se establece.

10º: Que por todo lo anteriormente espuesto, habiéndose demostrado hasta la evidencia que la autoridad de que habla el artículo tantas veces citado es la inmediatamente ejecutora, sobre su competencia debió haber versado el debate, y en este sentido ordenarse el procedimiento. Es por tanto, enteramente ajena á este juicio, la discusion sobre competencia y legitimidad del Poder Ejecutivo que promulgó el decreto.

11º: Que aun en el supuesto de que el Poder Judicial de la Federacion pudiera conocer, con motivo de las palabras *la autoridad competente* del art. 16 y por via de amparo, de la legitimidad del Poder Ejecutivo de un Estado, el suscrito Juez, en el presente juicio no podría hacerlo, por que ni siquiera se ha oido la voz informativa del C. Gobernador del Estado, y no se ha oido, porque al sustanciar el recurso se pidió como debia pedirse, conforme á la ley y como lo solicitaron tanto los quejosos como el C. Promotor fiscal, el informe correspondiente á las autoridades subalternas, contra cuyos actos se elevó la queja y se promovió el juicio.

12º: Que en la hipótesis de que con motivo de la violacion de alguna otra garantía y de las consignadas en el mismo repetido artículo, pudiera examinarse el valor y fuerza de una ley por falta de legitimidad en el

poder, encargado de su promulgacion no podría sin embargo, tenerse en cuenta en el presente juicio, porque se ha concretado á una sola que es la de competencia de que se hace mencion en el artículo en que se apoyó la queja, y sobre la cual ha volado únicamente la discusion judicial.

13º: Considerando por último: que de todo lo espuesto realmente se infiere, que no obstante que fuera verdad que la persona que como encargada del Poder Ejecutivo del Estado pronunció el decreto de 7 de Mayo último, no era Gobernador legítimo del mismo, y que por esta razon no era autoridad competente; de aquí en manera alguna se deduciria que no pueda hacerse efectivo sin violarse el art. 16 de la Constitucion, en las palabras que dicen *de la autoridad competente*, y por lo mismo es preciso tomar en consideracion la luminosa controversia acerca de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, y de la competencia ó incompetencia legitimidad ó ilegitimidad de los altos funcionarios del Estado de Morelos.

Por todas estas consideraciones, y con fundamento de los arts. 16, 101 y 102 de la Constitucion federal de la República Mexicana, declaro:

1º: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á la Señora Dª Manuela Cortazar de Cervantes y á los Sres. D. Josus y D. Faustino Goribar y Escandon Hermanos, en liquidacion contra el decreto de 7 de Mayo del presente año, que trata de hacerse efectivo en sus personas.

2º: Hágase saber esta sentencia á ambas partes, y remítase el expediente original á la Suprema Corte de Justicia para su revision, acompañándole las copias de estilo.

3º: Publíquese por la prensa.

Así lo decretó y firmó el C. Juez interino de Distrito del Estado de Morelos, C. Emilio Ordaz, por ante mí Doy fé.—*Emilio Ordaz.*—*Luis G. Labastida*, secretario.

Es copia que certifico.—*Luis G. Labastida*, secretario.

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Setiembre 7 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Antonio Robert, como apoderado sustituto de la Sra. Doña Manuela Cortazar y de los Sres. Goribar y Escandon hermanos, en liquidacion, contra los efectos de la ley de 7 de Mayo último, expedida por la Legislatura del Estado de Morelos.

Considerando: que al establecer el artículo 69 de la Constitucion del Estado de Morelos, que las faltas temporales del Gobernador cuando no excedan de seis meses, serán cubiertas por el Presidente del Tribunal Superior, deja cuando menos en duda si se refiere al Presidente nato del Tribunal, ó á cualquier Magistrado que accidentalmente ocupe ese puesto, dando lugar á que se adopte de preferencia la primera interpretacion, la circunstancia de haberse pretendido reformar el artículo citado, con la variacion de poner como reforma, que las faltas temporales del Gobernador se cubrirían por el Presidente del Tribunal Superior ó por quien hiciere sus veces.

Que aun en el caso de que la inteligencia natural de dicho artículo 69, fuere la de que debiera cubrir las faltas temporales de Gobernador, cualquier Presidente del Tribunal Superior, correspondería hacerlo á los Magistrados llamados por la ley, en el orden de su nombramiento.

Que estando prevenido en la fracción XVII del artículo 45 de la Constitucion de Morelos, que una de las facultades del Congreso del Estado, es la de nombrar Ministros interinos del Tribunal Superior de Justicia, en las faltas absolutas de los electos popularmente, mientras se procede á nueva eleccion, de este antecedente se deduce, que las faltas absolutas de los Ministros del Tribunal, no deben ser cubiertas por los suplentes que nombre el mismo, sino por los interinos que nombre el Congreso.

Que en esa virtud, al disponer el artículo 102 de la Constitucion de Morelos, que el Tribunal de Justicia se compondrá de tres Ministros y un Fiscal propietarios y otros tantos suplentes, que cubrirán las faltas de aquellos, debe considerarse que solamente faculta á los suplentes, para cubrir las faltas accidentales de los propietarios, en los asuntos de que corresponda conocer al Tribunal.

Que la inteligencia de que el artículo 69 de la Constitucion de Morelos se refiere, si no solamente al Presidente del Tribunal, si por lo menos á la exclusion de los suplentes, se robustece con la prevencion del artículo 103 de aquel Código político, conforme á la cual, los Ministros y Fiscal propietarios del Tribunal Superior, han de ser elegidos por eleccion popular, indirecta en primer grado, porque de lo contrario resultaria el contraprimipio de que llegara á funcionar como Gobernador del Estado, quien no emanara de la eleccion popular, sino en grado tan remoto, que se perdería verdaderamente ese origen.

Que si la Constitucion de Morelos, permitiera realmente que llegara á funcionar como Gobernador del Estado, un Ministro suplente nombrado por un número tan corto de individuos, que difícilmente pudiera reconocerles con el carácter de colegio electoral, pecaría entonces contra el artículo 109 de la Constitucion federal, por no ser admisible que esté respetada la forma de gobierno republicano, representativo, popular, cuando el poder Ejecutivo de un Estado se deposita en un individuo nombrado por otros dos ó tres.

Que al hacerse la aplicacion de las anteriores consideraciones al presente caso, se deducen las siguientes consecuencias: que si el Gobernador del Estado de Morelos no debe ser sustituido sino por el Presidente nato del Tribunal, lo ha sustituido indebidamente el ministro suplente, Lic. Agustin Clavería, que no tiene aquel carácter; que si el Gobernador puede ser sustituido

legalmente por cualquier ministro que preside el Tribunal; pero en el orden de su nombramiento, la sustitucion en el presente caso, correspondia al C. Lic. Vicente Rodriguez Villanueva, quien protestó contra la exclusion que se hacia de su persona, si bien se separó del Estado de Morelos, por no considerarse allí con las suficientes garantías para el desempeño del cargo que le tocaba ejercer; que el puesto del C. Lic. Vicente Rodriguez Villanueva, como presidente del Tribunal, no debia estimarse vacante, mientras no fuere destituido del cargo con arreglo á las leyes; que aun en el caso de que su puesto se hubiese considerado vacante por su falta absoluta, debia sustituirlo el ministro interino que tocaba nombrar el Congreso, mientras se procedia á nueva eleccion, que el C. Lic. Agustin Clavería solamente debia considerarse apto para cubrir las faltas accidentales de los Magistrados propietarios, en los asuntos de la incumbencia del Tribunal; que nombrado dicho suplente por dos ministros propietarios, no puede entrar al desempeño del Gobierno del Estado, sin infraccion del artículo 109 de la Constitucion federal de la República; y que estando ya declarado por esta Suprema Corte, que procede el amparo, por violacion del artículo 16 de nuestra Carta fundamental, cuando hay en las autoridades incompetencia de origen por falta de legitimidad, es tambien aplicable al presente caso la concesion de ese recurso que no envuelve sin embargo ninguna declaracion general.

Por tales consideraciones y legales fundamentos, se resuelve.

Primero: Que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito del Estado de Morelos, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á la Sra. Doña Manuela Cortazar de Cervantes, y á los Sres. Don Jesus y Don Faustino Goribar y Escandon hermanos, en liquidacion, contra

el decreto de 7 de Mayo del presente año, que trata de hacerse efectivo en sus personas.

Segundo: La Justicia de la Union ampara y protege á la referida Sra. Doña Manuela Cortazar de Cervantes, y á los Sres. Goribar y Escandon hermanos, en liquidacion, contra la aplicacion del expresado decreto de 7 de Mayo último.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de que proceden, con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toen.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José Maria Iglesias.—Miguel Auza.—Juan J. de la Garza.—José Maria Lozano.—José Arteaga.—Ignacio Ramirez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—Ignacio Maria Altamirano.—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José Garcia Ramirez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, 11 de Setiembre de 1874.—Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por D. Othon Wegelin, solicitando el amparo de la Justicia federal, contra cobros que le hace el Administrador de la Aduana del Estado, situada en Mazatlan.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que los cinco juicios de amparo intentados por D. Othon Wegelin, contra los procedimientos del C. Administrador de la Aduana terrestre de